

Informe político de la Coordinadora de IUCA

(Aprobado con un 97% de votos favorables y un 3% de abstenciones)

Lo que está ocurriendo en Gaza es el mayor exponente de la barbarie reaccionaria: un genocidio al servicio de la expansión de un Estado sionista. Netanyahu se ha convertido en el baluarte de la internacional reaccionaria rompiendo todas las reglas del derecho internacional y humanitario. Es una amenaza para la paz y para la democracia. La política de exterminio emprendida por el gobierno israelí vaticina cómo en tiempos de emergencia climática las potencias militares pretenden resolver la escasez de agua y recursos naturales mediante el despojamiento de los mismos a pueblos sin capacidad de defenderse a la altura de las agresiones. La incapacidad disuasoria de las Naciones Unidas deja en extrema vulnerabilidad a los pueblos sometidos por potencias regionales.

España ha reclamado a Israel el cumplimiento de la legalidad internacional y no participará en la misión del Mar Rojo liderada por los EEUU que no es sino un paso más hacia la extensión del conflicto. Nuestro país apuesta por el reconocimiento del Estado palestino y está manteniendo una posición alineada con las Naciones Unidas en un contexto europeo de equidistancia cuando no colaboración con el Estado de Israel. Sin duda esta posición responde al amplio apoyo popular a la causa palestina en nuestro país expresado en multitudinarias manifestaciones y reconocido en encuestas de opinión. No obstante, la magnitud de la agresión del Estado de Israel exige más contundencia y más pasos hacia la paz impulsados por nuestro país. Es por eso que desde IUCA nos sumamos a la campaña promovida por 375 organizaciones para aplicar un embargo de armas a Israel. No solo para evitar la venta de armas a dicho Estado sino también la compra de armas a Israel que, a mayor abundamiento, las vende con la “garantía” de haber sido probadas en combate, es decir, de haber sido usadas con éxito en masacres de civiles palestinos. IUCA se vincula a dicha exigencia de embargo de armas, pone toda su red de gobiernos y grupos municipales así como de asambleas locales al servicio de dicha campaña y participará de las movilizaciones previstas para el 20 de enero. En coherencia consideramos que la denuncia de Sudáfrica por genocidio ante la Corte Penal Internacional debe ser secundada



por nuestro país. Hay que hacer justicia y fortalecer la institucionalidad internacional para promover y garantizar la paz.

El próximo 28F ha de ser un punto de inflexión en la legislatura andaluza

Las dimisiones en la cúpula de la consejería de salud son síntoma de un secreto a voces: la pésima gestión del gobierno andaluz hace aguas. El gran fracaso del gobierno de Moreno Bonilla queda bien reflejado en el aumento de las listas de espera (más de un millón de andaluces esperan una operación o cita con el especialista) a la par que se producen transferencias históricas de dinero público a clínicas privadas (734 millones de euros). Neoliberalismo y negacionismo van de la mano en la gestión del sistema sanitario cuando el gobierno andaluz boicotea el uso de las mascarillas en pleno repunte de casos de gripe y covid. Es muy irresponsable que traslade la estrategia de acoso y derribo también a las políticas sanitarias emanadas del Ministerio que cuentan con el respaldo de la comunidad científica.

Esto evidencia que el modelo neoliberal no funciona para la mayoría social, a la que le deterioran los servicios públicos, y solo es rentable para los pocos que hacen caja con nuestros derechos, concretamente los fondos de inversión que se esconden detrás de las clínicas privadas. Nunca nuestro autogobierno había sido tan traicionado ni nuestros servicios públicos tan maltratados. Y ocurre en una coyuntura de ingentes transferencias del gobierno central y la UE a la JUNTA de Andalucía. Por eso este gobierno andaluz es una oportunidad perdida para nuestra tierra, porque en lugar de invertir recursos en fortalecer el estado del bienestar se dedica a aumentar las externalizaciones, a regalar privilegios fiscales a las grandes fortunas y envolverse en propaganda. Moreno Bonilla vive en su festival permanente de los Grammy, ajeno a la realidad y vendiendo humo. No en vano, en Andalucía la pobreza severa (la que afecta a personas que viven en hogares con ingresos menores a 560 euros al mes) es padecida por una décima parte de la población, es decir, 1.220.214 andaluces según el último informe de la Red Europea Contra la Pobreza y la Exclusión Social. Con estas cifras el recorte de los PJA en la Renta Mínima de Inserción denota el darwinismo social del modelo de sociedad que impone la derecha cuando gobierna.

El recorte en los servicios públicos ahonda en la fractura social y territorial. El desmantelamiento de servicios públicos y el recorte en ayudas sociales están profundizando la brecha entre el mundo rural y las ciudades. Uno de los factores del despoblamiento del mundo rural radica en

la falta de servicios públicos y, por tanto, de igualdad de oportunidades. Similar efecto tiene en las grandes ciudades en las que la segregación social crece con el abandono de barrios vulnerables. Ambas realidades, mundo rural y barrios vulnerables, van a ser objeto prioritario de nuestro trabajo.

Desde IUCA apostamos por afrontar las desigualdades y las incertidumbres de nuestra época edificando un Estado protector mediante el fortalecimiento de los sistemas de provisión social. Muy al contrario, el gobierno neoliberal de Moreno Bonilla sigue anclado en su ortodoxia del sálvese quien pueda. Así se expresa con toda la crudeza en las políticas sanitarias, en la falta de ayudas sociales y en las políticas educativas. El conflicto del personal técnico de integración social (PTIS) e intérpretes de lengua de signos es el paradigma de dicho modelo del sálvese quien pueda. La privatización y precarización extrema de estas trabajadoras no solo vulnera los derechos laborales y calidad en el empleo de quienes juegan un papel fundamental en el sistema educativo sino que, de facto, está privando del derecho a la educación del alumnado más vulnerable por sus necesidades especiales. Muchas niñas y niños están desatendidos por la falta de personal y el personal contratado lo está, en su mayoría, en precarias condiciones. No hay parangón en el conjunto de comunidades autónomas de una situación similar. Los niños y niñas de familias trabajadoras que necesitan de este personal especializado para poder recibir su derecho a la educación son dejados en la “cuneta” del sistema educativo por un gobierno andaluz sin política educativa para la mayoría social. Las políticas educativas del gobierno andaluz son ejemplo de privatización y segregación. En este curso ha cerrado 486 aulas en centros educativos públicos (hasta 2.000 aulas cerradas desde 2019) mientras no se ha cerrado ninguna en los centros privado-concertados que ven aumentadas las transferencias de dinero público. La desigualdad en Andalucía se fomenta desde la infancia con esta política educativa neoliberal. El deterioro del sistema público de enseñanza es palpable en la progresiva eliminación de la segunda lengua extranjera. Desde que el Partido Popular accedió a la junta de Andalucía la 2ª lengua extranjera ha sido eliminada de 3º y 4º de primaria, reducida a la mitad en 4 y 5º y convertida en optativa en la ESO y Bachillerato. Una medida incomprensible, que coloca al alumnado andaluz en una desventaja formativa respecto a otras comunidades para afrontar su vida universitario o su incorporación al mercado laboral y que supone el flagrante incumplimiento de los acuerdos alcanzados en materia de plurilingüismo en la Unión Europea durante los últimos 20 años.

La última publicación del INE sobre el PIB en 2022 sitúa a Andalucía como última comunidad autónoma en PIB per cápita – con 21.091 euros/habitantes, un 74,9% con respecto al índice estatal- y como penúltima en nivel de Renta (13.508 € por cada andaluz) siendo la punta del iceberg de otros índices como pobreza, paro juvenil o brecha de género en los que nos situamos también a la cabeza. Somos la comunidad autónoma que menos riqueza genera por habitante y la segunda más pobre, lo que representa a todas luces un fracaso absoluto de la política económica del gobierno de Moreno Bonilla. Estos datos echan por tierra la única receta aplicada por Moreno Bonilla a la hora de afrontar los retos del momento: bajar impuestos a los más ricos. Con las estadísticas oficiales en la mano se desmontan los grandes titulares: ni el dinero está en el bolsillo de la gente, ni bajando impuestos crece la recaudación -ni se aumentan los contribuyentes (Andalucía crece 3 décimas por debajo de la media), ni atrae inversiones, crecemos 3 décimas menos que el país-. El milagro económico andaluz que el Gobierno vende no es tal. Moreno Bonilla aplica con radicalidad el modelo económico neoliberal del PP. Carece de una estrategia para la transformación del modelo productivo. La apuesta del PP es insostenible desde el punto de vista económico, laboral, social y medioambiental. Se resume en una apuesta única por un modelo turístico insostenible, con poner alfombras rojas a la uberización de sectores estratégicos (en el sector primario avanza a pasos agigantados) en el que fondos de inversión practican un capitalismo extractivista y en el anhelo por el resurgir del ladrillo con las mismas bases especulativas de décadas pasadas.

Más de ochenta mil personas se encuentran en la provincia de Córdoba desde hace meses sin agua potable por la contaminación del embalse de La Colada. La negligente gestión del gobierno andaluz ha llevado a IU a denunciar ante fiscalía al gobierno andaluz por posible prevaricación ambiental y está generando una intensa respuesta con movilizaciones y acciones de protesta. Desde este jueves los ocho municipios del campo de Gibraltar tienen restricciones por la sequía con una drástica bajada de presión o incluso cortes totales desde las 23:00 hasta las 6:00. Afecta a más de 260.000 personas. En Almería, se están dando cortes de agua por declaración de agua no apta por radioactividad de las aguas subterráneas que ha afectado varios núcleos de población en Almería capital.

La gestión del bien máspreciado para la vida, el agua, está siendo absolutamente irresponsable. Mientras Andalucía padece la peor sequía desde que hay referencias históricas el gobierno andaluz ha permitido el aumento exponencial de las tierras de regadío, la instalación de nuevos

campos de golf y macroproyectos urbanísticos (véase el de la familia Franco sobre el acuífero de Coín), y no ha controlado el impacto de la industria ganadera en La Colada.

La respuesta ante esta gravísima crisis hídrica que pone en riesgo la actividad agrícola (muchos productores están teniendo que renunciar a cosechar por falta de agua) y el suministro de agua a la población está siendo la típica de Moreno Bonilla cuando hay problemas: confrontar con el gobierno central y hacer propaganda. El gobierno andaluz obvia es imposible resolver este problema estructural de déficit hídrico mediante la proliferación masiva de desaladoras y de trasvases masivos. La instalación de desaladoras requiere de una planificación, hoy por hoy inexistente, y respondería a una tímida solución coyuntural porque la solución a la escasez requiere de otras medidas más complejas. Por el contrario, resulta imperiosa una moratoria en la instalación de macroproyectos urbanísticos, en nuevos campos de golf y, coherentemente, ayudar a una transición de cultivos de regadío a cultivos menos demandantes de agua, así como acometer la depuración y uso terciario del agua. La gestión del agua se debe hacer en función de la oferta y no de la demanda. Hay que cambiar el modelo de desarrollo para adecuarlo a la emergencia climática porque vamos al colapso del sector agrícola en muchas comarcas y a las restricciones masivas de agua a las poblaciones con el consiguiente impacto en actividades económicas fundamentales como el turismo. Desde la coordinadora andaluza vamos a celebrar unas jornadas monográficas sobre la cuestión hídrica en las que aportemos propuestas para la coyuntura de escasez de agua así como para un cambio de modelo acorde al cambio climático.

Priorizar el interés económico inmediato a costa de la supervivencia de los ecosistemas en el futuro es propio de la cultura del pelotazo que la derecha neoliberal ha aplicado en Doñana. Moreno Bonilla se metió en un callejón sin salida con su pretensión de legalizar regadíos ilegales y tuvo que ser el gobierno central y la opinión pública quienes le hicieran rectificar. La falta de responsabilidad y convicción sobre el problema del agua se advierte en la *otra Doñana* que se está originando en Sierra Nevada. Hemos pedido al Parlamento Europeo y al gobierno central que investiguen lo que podría ser una sustracción masiva, continuada e irregular de grandes caudales de agua del río Dílar, desde el interior del Parque Nacional de Sierra Nevada, hacia afuera por parte de la empresa de la JUNTA de Andalucía, Cetursa, para la fabricación de nieve artificial sin contar con ninguna concesión de agua para dicho uso industrial. Una absoluta barbaridad medioambiental a la altura de las pretensiones del gobierno andaluz de ampliar la estación de esquí en plena emergencia climática.

Lejos de “celebrar las altas temperaturas” como ha hecho el consejero de turismo por los 30 grados alcanzados en el mes de diciembre lo que corresponde es acometer las transformaciones necesarias para adaptar nuestros sectores económicos al cambio climático y, en particular, a la escasez de agua. El sector del turismo supone cerca de un 11% del PIB andaluz. Corresponde encauzar su futuro hacia la sostenibilidad para evitar su colapso. La actitud del gobierno andaluz centrada en computar el aumento de pernoctaciones como indicador de éxito es un tremendo error. Hay que insertar las evaluaciones en indicadores que prevengan la viabilidad de un sector muy vulnerable al cambio climático.

La crisis de los pellets está evidenciando que el negacionismo del Partido Popular es un riesgo para nuestro entorno natural y que es necesario avanzar en un marco legislativo que recoja el delito de ecocidio para prevenir desastres y para garantizar medidas de contención y reparación eficaces entre las distintas administraciones, así como una regulación del comercio marítimo internacional acorde a los riesgos medioambientales del mismo.

Esta misma irresponsabilidad y negación de la realidad que fastidia la propaganda gubernamental se aprecia en la absoluta dejadez ante el problema de la vivienda. La gentrificación se extiende por las ciudades andaluzas y áreas metropolitanas mientras no se limitan precios del alquiler, ni se promueve vivienda pública, ni se satisface la amplia demanda de ayudas al alquiler. Se está dejando a la gente a la intemperie del mercado en manos de unos pocos fondos de inversión que se han hecho con el parque de viviendas. No hay ni siquiera una voluntad firme de regular los pisos turísticos que son ya un problema de primer orden en muchas ciudades andaluzas.

Los ayuntamientos están pagando los platos rotos de la pésima gestión del gobierno andaluz y de sus políticas neoliberales. Asumen competencias impropias para garantizar la igualdad de oportunidades de sus vecinos mientras se encuentran asfixiados económicamente por insuficiente financiación. El gobierno andaluz tiene que cumplir con los ayuntamientos haciendo las transferencias de la PATRICA y los ayuntamientos tienen que tener una revisión de sus deudas en tanto se hayan generado por la prestación de servicios públicos que la JUNTA ha dejado de prestar o de financiar.

Los PJA se han vendido como históricos pero, más bien, han sido la historia de siempre desde que gobierna el Partido Popular. Se reduce la capacidad de ingresos de JUNTA, aumenta la

injusticia fiscal con los privilegios fiscales a las grandes fortunas y se evidencia, con respecto a los presupuestos de 2023, una bajísima ejecución. El gobierno andaluz cuenta para 2024 con unas cifras históricas en cuanto a transferencias del gobierno central y de la UE pero no prevé un refuerzo de los servicios públicos a la altura de las necesidades de la sociedad andaluza que encabeza las tasas de precariedad y desigualdad de la UE. Llama la atención que, por sumarse a la política de tierra de quemada de Ayuso, Moreno Bonilla haya descartado la quita de deuda que ofrece el gobierno central. Supondría un alivio financiero nada despreciable ante las necesidades de nuestra tierra, pero Moreno Bonilla antepone los intereses de su partido, centrado en el acoso y derribo al gobierno central, para insertar esta quita en su confrontación permanente. En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera el gobierno central propuso más margen de déficit a las comunidades autónomas que el exigido por Bruselas a lo que hay que añadir que las transferencias del Estado a las comunidades autónomas, como atestigua el PJA, son históricas (desde que no gobierna el Partido Popular las comunidades autónomas han recibido hasta un 40% más). Sin embargo, el Partido Popular ya ha amenazado con tumbar los objetivos de estabilidad en el Senado y, como prevén los PJA de Moreno Bonilla, las transferencias históricas del gobierno central no pretenden destinarlas al reforzamiento de los servicios públicos sino a continuar la senda de privilegios fiscales a las grandes fortunas, incentivar el dumping fiscal e incrementar las externalizaciones de servicios públicos. Resulta del todo incoherente la actitud victimista de Moreno Bonilla y su confrontación con el gobierno central a cuenta de la financiación autonómica.

La ofensiva neoliberal de destrucción de lo público viene acompañada de una reescritura de la historia en la que se vacía de raíces y perspectivas progresistas el 4D y el 28F. La derecha andaluza quiere resignificar el andalucismo desvinculándolo de las históricas y presentes aspiraciones de justicia social. De esta forma, utiliza la bandera andaluza para confrontar con el gobierno central y para oponerse a Cataluña bajo una pretendida defensa de la igualdad. Todo es una farsa. El proyecto que el gobierno de Moreno Bonilla lleva a la práctica supone un vaciamiento competencial del autogobierno por la vía de los hechos y una traición al espíritu del Estatuto de Autonomía. El gobierno andaluz confronta con el gobierno central sirviéndose de Cataluña mientras promueve el dumping fiscal entre comunidades autónomas. Es el gobierno de una minoría privilegiada insensible a la desigualdad social entre los andaluces, es todo lo contrario al mensaje de Blas Infante y de los anhelos expresados en las calles el 4D y en las urnas el 28F. El Partido Popular es baluarte de un nacionalismo españolista y centralista que no se cree

la plurinacionalidad del Estado ni la realidad nacional andaluza. Precisamente son las élites rentistas para las que gobierna el Partido Popular las más beneficiadas de un modelo productivo que fomenta las relaciones de dependencia entre la periferia y el centro. Así encuentran en Andalucía mano de obra barata y concesiones de la administración a la que vampirizar.

Este 28F debe ser un hito en la legislatura marcando el declive definitivo de un gobierno andaluz en manos de la derecha. Las pasadas elecciones generales de julio ya atisbaron que la derecha había tocado techo. Es momento de que las fuerzas progresistas pasen a la ofensiva y vayan generando expectativas de un cambio político en nuestra tierra. El 28F debe ser una oportunidad para que se exprese la fuerza de un tejido social andaluz firmemente comprometido y arraigado. Desde IUCA nos vamos a volcar en dicha manifestación para que sea un éxito desde cada municipio. Los movimientos sociales con los que colaboramos en cada conflicto y territorio deben sentirse interpelados y sus demandas deben ser protagonistas ese día. Del mismo modo, la militancia de IUCA, curtida y conocedora de lo que nos jugamos, debe estar a la altura, como en tantas otras ocasiones, y jugar su papel en la difusión y preparación de la manifestación. Y allí no puede faltar nadie porque si Andalucía está en movimiento comienza la quiebra del gobierno de la derecha.

El movimiento feminista ha sido crucial para frenar a las derechas reaccionarias en las pasadas elecciones generales. No por casualidad las conquistas y reivindicaciones feministas están en el punto de mira de la ultraderecha. Este movimiento es imprescindible para el avance de Andalucía y, en consecuencia, IUCA se vuelca con su fortalecimiento y vertebración. Desde el Área de Política Feminista se realizarán en febrero las jornadas “Feministur” para abordar el plan de igualdad de IU así como talleres de nuevas masculinidades. Desde la coordinadora emplazamos al conjunto de asambleas y estructuras provinciales a realizar actividades similares a fin de implicar al conjunto de la militancia en los objetivos de dichas jornadas.

El primer asesinato por violencia de género de 2024 se ha producido en Andalucía (un tercio de las víctimas fueron andaluzas en 2023) y pone el foco en todo el camino que queda por recorrer en nuestra tierra hasta desterrar el patriarcado y sus violencias. Son inadmisibles los recortes del gobierno ni la denegación de un 23% de órdenes protección, ni que el gobierno andaluz mantenga el marco negacionista de la ultraderecha con el teléfono de violencia intrafamiliar así como las subvenciones a organizaciones ultras que acosan a mujeres cuando van a interrumpir voluntariamente su embarazo.

Andalucía no debe perder el tren

A pesar de la enorme presión de los poderes fácticos para evitar un gobierno de coalición se produjo la investidura y conformación de gobierno sustentando en una mayoría democrática y plurinacional. Ni se trata de un gobierno ilegítimo ni provisional. Tiene una base democrática con solidez suficiente para garantizar avances durante una legislatura completa si todos los actores actúan con la responsabilidad debida de cara a la mayoría social trabajadora. Por ello debemos contribuir a que haya una voluntad política decidida para acometer las transformaciones necesarias de la mano de los sindicatos de clase y organizaciones sociales alineadas con un programa de gobierno progresista. En este punto volvemos a incidir en la importancia de dotar de empuje popular desde la calle a una agenda de gobierno progresista y, en este sentido, la capacidad de Andalucía de hacerlo valer. Andalucía demanda políticas que garanticen la cohesión territorial, la cohesión social y el cambio de modelo productivo que entroncan con las soluciones a sus problemas estructurales así como con un nuevo país.

Aún con una compleja aritmética parlamentaria la reforma constitucional será una oportunidad de esta legislatura. En este sentido, desde IUCA consideramos que debe ser aprovechada para ahondar en el proceso de profundización democrática que exhorta la sociedad andaluza y española. Hay reformas largamente postergadas durante el periodo bipartidista que hoy deben ser objeto del debate público y de la consiguiente reforma constitucional como son la reforma del sistema electoral y del senado, el blindaje constitucional de la revalorización de las pensiones acorde al IPC, la reversión de la contrarreforma del artículo 135, la garantía constitucional de financiación de servicios públicos, la eliminación de la pena de muerte en tiempos de guerra o el reforzamiento del Estado social otorgando a derechos como el de acceso a la vivienda, la seguridad social, la dependencia, el trabajo o derecho al medio ambiente la consideración de derechos fundamentales.

Las primeras medidas del gobierno apuntan una línea sobre la que continuar con determinación: proteger a la gente y aumentar la presencia del Estado en los sectores estratégicos de la economía. La entrada del Estado en Telefónica con un 10% del capital de la empresa revierte el falso paradigma que sustentó la política de privatizaciones desarrolladas por los gobiernos de Felipe González y Aznar que ha menguado las capacidades de intervención pública en sectores

estratégicos de la economía. Es fundamental revertir dicha lógica neoliberal y entender que ante los retos presentes y futuros hace falta un Estado protector y capaz, es decir, con empresas públicas en sectores estratégicos. En coherencia con ello no se entendería que la aspiración del gobierno de hacer más ágil la administración mediante la digitalización fuese obra de empresas externas. Ese proceso debe ser desarrollado por la propia administración para no perder soberanía.

De los tres decretos presentados el 10 de enero en el Congreso no se aprobó el que reformaba los subsidios por desempleo por el voto en contra de Partido Popular, Vox y Podemos. Eso deja en el aire la ampliación de las cuantías del subsidio, la universalización del permiso de lactancia o la mayor protección de los trabajadores agrarios además de cuestionar las transferencias europeas de más de 10 mil millones de euros. Poca broma ante esto. Sí se ha aprobado el decreto omnibus y el decreto anticrisis garantizándose de esta manera medidas de alivio ante la inflación, paralización de desahucios o subida de las pensiones. El voto de las derechas reaccionarias es coherente con su proyecto de país, en el que prime la ley del sálvese quien pueda, y con su pretensión de asfixiar todo lo posible al gobierno de coalición. Menos comprensible es el voto de Podemos, máxime cuando su reivindicación podía hacerse valer en la tramitación parlamentaria posterior, de haberse aprobado el decreto. Parece que la razón del rechazo de Podemos no estribaba en el contenido del decreto sino más bien en deteriorar al gobierno -y especialmente a Sumar- con objeto de “hacerse valer” de cara al desarrollo de la legislatura recién iniciada. Ansia protagonismo y pretender jugar un papel determinante es legítimo pero en ningún caso debería anteponerse a los intereses de las capas populares. La notoriedad de ningún partido puede estar por encima de los intereses de la clase trabajadora.

Es evidente que esta legislatura necesitará audacia del gobierno, empuje popular, mucho diálogo y negociación. Es exigible máxima responsabilidad a las fuerzas políticas de la investidura y, especialmente, a quienes dicen defender el interés general. Nos exige también a las fuerzas en el gobierno a sintonizar con el conjunto de la base electoral progresista para que su sentido común ahuyente la politiquería de las “cosas del comer”.

La subida del SMI a 1.134 euros beneficia a prácticamente la mitad de la clase trabajadora andaluza evidenciándose el enorme impacto en Andalucía de las políticas sociales y, en particular, del Ministerio de Trabajo. Nos corresponde apoyar los procesos de negociación colectiva que están impulsando las organizaciones sindicales en la actualización de las tablas salariales. En provincias como Almería es necesario que se pueda impulsar un convenio colectivo

del campo en negociación actualmente. Igualmente, hay que empujar para que mejoren las condiciones en las que los trabajadores agrarios menores de 25 años accedan al subsidio por desempleo por la difícil situación en la que se encuentra el campo andaluz y su impacto en el trabajo.

Es muy importante que este gobierno comience por atender la difícil situación del campo andaluz, muy especialmente de aquellos pequeños y medianos productores del sector del olivar y el viñedo, los cuales necesitan unas ayudas extraordinarias para afrontar la crisis derivada de la guerra de Ucrania, la inflación y la sequía. Desde IUCA vamos a trasladar al gobierno iniciativas que promuevan la agricultura social y familiar por su capacidad de arraigar a la población al territorio y por su contribución a la seguridad alimentaria.

El arraigo de la población al territorio, la disminución de la huella de carbono, la cohesión territorial y el dinamismo económico confluyen en el desarrollo del tren público y social. Esta es una apuesta estratégica de IUCA que comparte con plataformas, organizaciones ecologistas y sindicatos, y que cuenta, cada vez más, con el respaldo popular. Vemos fundamental para el abordar las transformaciones que necesita Andalucía reabrir líneas férreas cerradas, incrementar las líneas de cercanías, mejorar los servicios de los trenes regionales y acabar con los desiertos ferroviarios en los que se encuentran muchas comarcas andaluzas. El gobierno andaluz va a focalizar su confrontación con el gobierno central en el tren a pesar de que fue el gobierno de coalición anterior el que revirtió la nefasta tendencia de desinversiones en los trenes de cercanías y media distancia. Esta legislatura tiene que continuar esa línea de mayores inversiones para el tren público que vertebraba el territorio y no tanto para la alta velocidad. Del mismo modo reclamamos para Andalucía la gestión de los trenes de cercanías y exigimos al gobierno andaluz a que pida dicha gestión sin ambages ni excusas.

El deterioro de la convivencia por los discursos de odio y por el revisionismo histórico que difunden la derecha ultra y la ultraderecha es una de nuestras mayores preocupaciones. Hemos de cimentar pilares fuertes para la convivencia que impidan romper consensos en torno a la defensa de los derechos sociales y garantías democráticas conquistadas en la transición. Por eso es importante que el Congreso de los Diputados brinde el reconocimiento que merece a Manuel José García Caparrós y sea tratado como víctima del franquismo. Porque la transición no fue un proceso pacífico ni obra de “grandes hombres”. Fue un proceso en el que el Estado franquista y

fuerzas paramilitares ultraderechistas sembraron el terror. Sin el empuje popular de personas anónimas, como en su momento Caparrós, no se habría roto el guion que tenía establecida una democracia restringida.

Por un frente amplio que articule el potencial de las izquierdas

Hemos analizado que la repuesta política y electoral en la coyuntura histórica que atraviesa también Andalucía exige la articulación en un mismo espacio político de las distintas izquierdas. Responde además a una pretensión originaria en el nacimiento de Convocatoria Por Andalucía de superar la forma partido y dotarse de distintas maneras de participación e implicación como forma de implicar a más gente a la acción política frente a un riesgo de desafección en el campo de la izquierda.

Hoy por hoy debe ser un objetivo común conseguir un sujeto político que sea heterogéneo en sus actores (partidos políticos, organizaciones sociales y personas independientes), plural en lo ideológico dentro del campo progresista, diverso en su composición partidista y con una concepción plurinacional del Estado con especial significancia para Andalucía en tanto nacionalidad histórica. Desde ese amplio abanico se han de brindar los cauces a la participación popular, es decir, a personas que se vinculan con mayor o menor implicación y mediante su adscripción partidista o de manera independiente. Para ello hace falta un “código de circulación” para seguir una hoja de ruta compartida que agrande y fortalezca el sujeto político desde las diversas contribuciones al mismo.

Pluralidad y funcionamiento democrático

Las condiciones de posibilidad de un sujeto político con estabilidad y certidumbres en torno a su futuro requieren su democratización, es decir, mancomunar aquello que entre todas conformamos.

Hasta ahora hay un déficit de funcionamiento democrático en la articulación del espacio político: para revertirlo, es preciso que Sumar, como expresión actual del Frente Amplio, se debe referenciar en el conjunto de actores que lo conforman y, de la misma manera, cada una de sus partes también han de ser voz de Sumar. Porque Sumar es un paraguas que agrandamos y sostenemos entre todas y todos para dar cobijo a todas las izquierdas y a todos los actores, sean partidos o personas independientes. Coherentemente con ello no apostamos por crear un partido

político al uso en el que se disuelva la diversidad, ni tampoco por crear un partido-marca sin arraigo territorial y controlado ademocráticamente por una de las partes. Vamos más allá: queremos un frente amplio, democrático en su funcionamiento y con un capital simbólico (marca electoral) gobernado por su pluralidad. De ahí que se deba superar la patrimonialización exclusiva de Sumar por el partido Movimiento Sumar y transitar hacia una socialización de dicha marca, paraguas de todas y todos, y hacia una gobernanza conjunta de la misma.

En pie de igualdad debemos impulsar un proceso para agregar a más actores, aportando nuestro patrimonio y arraigo para el éxito de un frente amplio que sea referencia mayoritaria de la ciudadanía progresista de izquierda.

Las venideras elecciones gallegas, vascas y europeas son oportunidades en las que avanzar, en lo programático y electoral, pero también en lo organizativo, con respecto a las elecciones generales e ir transitando a formas de dirección y representación propias de un sujeto político plural como es la coalición Sumar. Del mismo modo, la prevista Asamblea Ciudadana así como la ulterior Asamblea Constituyente de Sumar tienen que erigir la arquitectura del sujeto político bajo la fórmula de frente amplio.

Toca desde IUCA dotar de impulso al proceso que de como resultado un frente amplio con 1) arraigo territorial, 2) proyecto alternativo de país y 3) sin que ningún actor se quede atrás.

Para impulsar el proceso—se van a crear grupos promotores de Sumar en Andalucía y en el conjunto de territorios. Contemplamos nuestra participación y compromiso con dicho grupo promotor andaluz bajo unos criterios idóneos para un sujeto político democrático, amplio y superador de lo actualmente existente. IUCA asume esa responsabilidad acorde con su arraigo territorial, despliegue institucional y capacidad de movilización, y tiene claro que debe mancomunarse la marca Sumar Andalucía entre todos los actores que la sustentan.

Socializar lo que es de todas (la marca Sumar o cualesquiera otra específica andaluza), democratizar su participación y tomas de decisiones y tener una representatividad acorde a su peso en el territorio plasmarían un criterio político responsable para la implicación de IUCA en la construcción de Sumar.

Volcamos nuestro patrimonio político, nuestro activismo militante y nuestra implantación territorial al servicio, una vez más, de la clase trabajadora andaluza que nos lo exige.



Informe político de 13 de Enero de 2024



Informe político de 13 de Enero de 2024